

3

132

Mario Germán Ortiz Montoya

Abogado U. Santiago Dr de Cali

Calle 36 25-34 b/Salesianos Tuluá - Valle Tel. 2328473 Cel. 3163457056 - 3166268956
ortizperezabogados@gmail.com

Señor:

JUEZ DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO - reparto

Guadalajara de Buga

Asunto: **ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

Demandante: **HUGO MONCAYO CASTRO**

Demandado: **UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES - UGPP**

MARIO GERMAN ORTIZ MONTOYA, persona mayor de edad y vecino de Tuluá, identificado con la CC.No.6.181.746 expedida en Buga, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.14586 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del señor **HUGO MONCAYO CASTRO**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Cali (V), identificado con la CC.No.14.870.354 expedida en Buga (V), de acuerdo con el poder adjunto, por medio de este escrito presento **DEMANDA DE ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** en contra de la **UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP**, entidad con personería jurídica, representada para estos efectos por su actual Director o por quien lo reemplace o lo represente legalmente, con domicilio en Bogotá, a fin de que previos los tramites del proceso contencioso administrativo, se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Resolución No.16977 del 29 de abril de 2015, mediante la cual se niega la solicitud de reliquidación pensional; La Resolución No. RDP029095 del 15 de julio de 2015 que resolvió el recurso de Reposición; La Resolución No. RDP042304 del 15 de octubre de 2015 y la Resolución No.ADP013195 del 21 de octubre de 2015, por medio de las cuales se resuelven los recursos interpuestos en contra de la Resolución 16977 del 29 de abril de 2015.

Actos administrativos en los que me desconocen los derechos laborales adquiridos, debiéndose en consecuencia restablecerse mi derecho, revisándose la pensión de vejez que me fue reconocida, de conformidad con lo establecido en el Artículo 98 de la Convención colectiva de trabajo pactada entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, teniendo como ingreso base de liquidación, el 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio, ordenándose el respectivo reconocimiento y pago a mi favor el de la diferencia que resulte, sumas que deberán ser indexadas y a partir del 01 de noviembre del año 2004, cuando adquirió el status de pensionado, previos los siguientes:

1. HECHOS

- 1.1 El señor **HUGO MONCAYO CASTRO**, nació el día 24 de marzo de 1.949.
- 1.2 El señor **HUGO MONCAYO CASTRO**, ingresó a prestar sus servicios profesionales al **Instituto de Seguros Sociales, desde el 01 de Abril de 1.980**, siendo incorporado automáticamente y sin solución de continuidad en la planta de personal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO**

NARIÑO, a partir del 26 de junio de 2003, hasta la fecha del retiro definitivo del servicio, esto es, **al 30 de Octubre de 2004**.

- 1.3 Para efectos de la **adquisición de su status pensional**, el Médico **HUGO MONCAYO CASTRO**, acreditó haber laborado durante un lapso continuo e ininterrumpido de 24 años, y 7 meses, siendo el último lugar de prestación de servicios, la ciudad de Buga (V), por tanto, la ESE ANTONIO NARIÑO reconoció su Pensión de Jubilación equivalente al 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios por concepto de todos los factores salariales que constituían salario, mediante la **RESOLUCION No.1062 DE 28 DE OCTUBRE DE 2004**, en cuantía inicial de \$2'955.299 a partir del 01 de Noviembre de 2004.
- 1.4 El Médico **HUGO MONCAYO CASTRO**, es beneficiario de la Convención Colectiva suscrita entre la Organización Sindical "Sintraseguridad Social" y el Instituto de los Seguros Sociales, dado que en el Artículo Tercero se señala que ésta, cubre tanto a los trabajadores sindicalizados como a quien **"sin serlo no renuncie expresamente a los beneficios de ésta convención, según lo previsto en los artículos 37, 38 y ss. del Decreto 2351 de 1.965"**, y por parte de éste no se ha renunciado a la Convención Colectiva, ya que al contrario, se ha pedido la aplicación de las estipulaciones y mejoramientos laborales y prestacionales que le favorecen de conformidad con lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Convención Colectiva de Trabajo invocada, la cual contaba con plena vigencia para la época de subsistencia de la vinculación laboral.
- 1.5 Por parte de la Corte Constitucional, al proferirse los fallos C-314 y C-349 de 2004, se sentó jurisprudencia en el sentido de aclarar que los mejores derechos y prestaciones sociales que contenía la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, debían seguirse respetando y reconociendo como derechos adquiridos, ya que por el hecho de haber ingresado al patrimonio del trabajador, no podían ser afectadas, entre ellas se encuentra la contemplada en el Artículo 98 de dicha convención, en el que se consagra el derecho a que se liquiden las pensiones de jubilación con el cien por ciento (100%) del promedio de lo percibido en los dos últimos años de servicio, para aquellos trabajadores que hubiesen laborado en el ISS durante 20 o más años de servicio, tal y como aconteció con el Médico **HUGO MONCAYO CASTRO**.
- 1.6 La Convención Colectiva a la que se ha venido haciendo alusión, cuenta con plena vigencia, dado que por ministerio de la ley continúan las prórrogas y además, mediante la Resolución No.00989 de 2005, el Ministerio de la Protección Social, se negó al ISS la solicitud de convocatoria de un Tribunal de arbitramento para resolver la denuncia parcial de la convención colectiva suscrita entre esta entidad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social.
- 1.7 El Médico **HUGO MONCAYO CASTRO**, actuando a través del suscrito, formula solicitud de Reliquidación Pensional, a fin de que se calcule el valor de su mesada, dando aplicación a los beneficios contenidos en la Convención Colectiva, dado que al momento del reconocimiento de su status pensional,

se le dio aplicación al régimen general de los servidores públicos de que trata la ley 33, es decir, teniendo en cuenta el 75% del promedio recibido en el último año de servicio, lo cual le resulta más perjudicial.

- 1.8 Mediante la **Resolución No.16977** del 29 de abril de 2015, se niega la solicitud de Reliquidación Pensional.
- 1.9 Contra dicha decisión, se presentaron los recursos de Reposición y Apelación.
- 1.10 Mediante las **Resoluciones No.RDP029095** del 15 de Julio de 2015, **No.RDP042304** del 15 de octubre de 2015 y **ADP013195** del 21 de octubre de 2015, se resuelven los recursos de reposición y de apelación interpuestos en contra de la Resolución 16977 del 29 de abril de 2015, en el sentido de confirmar en todas sus partes la resolución recurrida, argumentando que el peticionario "... **laboró por más de veinte años en distintas entidades de Derecho Público, circunstancia por la que es procedente la acumulación de tiempo de servicios prestados y cumplió con las condiciones del Régimen de Transición establecido en la Ley 100 de 1993, razón por la cual se hace acreedor a los beneficios del tiempo y edad de antiguo régimen...**".
- 1.11 Con dichos actos administrativos quedó agotada la actuación administrativa.
- 1.12 Por parte del Demandante se me ha conferido poder para esta acción litigiosa.
- 1.13 **CONCILIACION PREJUDICIAL FALLIDA:**

El día 07 de junio de 2016, se celebró en la Procuraduría 58º Judicial de Cali, la Conciliación entre el Convocante DR. HUGO MONCAYO CASTRO y la convocada UGPP, diligencia esta solicitada por mi poderdante en busca de un acuerdo conciliatorio mediante el cual la entidad convocada reconociera sin necesidad de proceso administrativo, el Reajuste a su Pensión a que tiene derecho el pensionado MONCAYO CASTRO, en cuantía del ciento por ciento (100%) de acuerdo con lo reglado en la CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, art.98 celebrada entre SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el ISS.

En desarrollo de la audiencia se escuchó a las partes y mientras en mi condición de apoderado del convocante me ratifiqué en lo solicitado en el libelo convocatorio en cuanto hace a los hechos, las peticiones y la cuantía, el polo pasivo por medio de su representante, manifestó no tener ánimo conciliatorio, aduciendo como razones para ello, varios elementos de juicio, entre ellos el hecho de que el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cali, había negado los derechos laborales a mi poderdante, revocando la decisión de primera instancia tomada por el JUZGADO 10º laboral del circuito de Cali, pero esa alegación carece de fundamentos, porque en la segunda instancia lo que se dijo, fue principalmente que la vía escogida por el demandante para hacer valer sus derechos laborales, no era la vía ordinaria, sino la vía administrativa.

El planteamiento expuesto por la representante de la UGPP es a todas luces erróneo y no hace honor a la verdad procesal, muy por el contrario, si se hubiera hecho una lectura completa y correcta, se habría dado cuenta que el a quem lo

6 125

Mario Germán Ortiz Montoya

Abogado U. Santiago Dr de Cali

Calle 36 25-34 b / Salesianos Tuluá - Valle Tl. 2328473 Cel. 3163457056 - 3166268956
ortizperezabogados@gmail.com

que hizo fue dejar sentado tanto la dependencia laboral del Demandante, el tiempo de servicio y lo calificó como Trabajador oficial y por lo tanto, dejó en libertad al Dr. MONCAYO CASTRO, para acudir a un procedimiento diferente en el que se reconocieran sus derechos sin desconocer en ningún momento su aspiración a que se le reajuste su pensión en la proporción legal pactada en la convención.

En el escrito sustentatorio de su posición en representación de la UGPP, la Dra. XIMENA ADRIANA MUÑOZ COLLAZOS, manifestó no conocer el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali-Sala Laboral, mediante el cual se revocó la providencia del juzgado 10º laboral de Cali, de lo cual surge entonces una pregunta: Si no conoce el fallo de segunda instancia, cómo alega el contenido del mismo?

Se dijo además, que al convocante le es aplicable el régimen de transición de que trata la ley 100 y no la Convención colectiva (art. 98), con lo cual se incurrió en un nuevo error.

Resumiendo todo lo anterior, tenemos que los argumentos esgrimidos por la representante de la UGPP para no conciliar, no son válidos y por lo tanto, no podrán ser tenidos en cuenta.

1.14. FALLO RECIENTE PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 100% DE LOS DERECHOS PENSIONALES DE LOS TRABAJADORES DEL ISS

En sentencia del 03 de septiembre del 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en una Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho, numeral 2º, ordenó reconocer y pagar la Pensión de Jubilación a partir del 01 de noviembre de 2011, en cuantía equivalente al 100 % ciento por ciento del promedio mensual percibido en los últimos dos años de servicio, es decir, aplicando el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo entre SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el ISS. Este fallo se produjo en el proceso propuesto por Fabiola Satizabal Gonzales contra la UGPP, cuya copia informativa acompañó y cobija o compendia una situación laboral igual a la que hoy reclama el demandante en el presente asunto.

1.15. APORTACION DE FACTORES SALARIALES:

En la Resolución No. No.RDP029095 del 15 de Julio de 2015 que resolvió el recurso de Reposición, la UGPP exigió para entrar a estudiar la solicitud del demandante, Certificación de los Factores salariales correspondientes al DR. MONCAYO CASTRO por los siguientes periodos: entre Junio y Julio del año 2003 y del periodo entre Septiembre y Octubre de 2004; Con el fin de que ese documento no haga falta a la hora de cualquier decisión, hoy aportó copia debidamente autenticada del mismo para que sea tenido en cuenta como una prueba más dentro el presente proceso.

2. PRETENSIONES

- 2.1 Se solicita la declaratoria de Nulidad del acto administrativo complejo, compuesto por la **Resolución No.16977** del 29 de abril de 2015, mediante la cual se niega la solicitud de reliquidación pensional; La **Resolución No. RDP029095** del 15 de julio de 2015, la **Resolución No. RDP042304** del

15 de octubre de 2015 y la **Resolución No.ADP013195** del 21 de octubre de 2015, por medio de las cuales se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de la resolución 16977 del 29 de abril de 2015.

- 2.2 Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la entidad demandada, a reconocer y cancelar al actor o a quien represente sus derechos, a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación y ajuste de su mesada pensional **en cuantía del cien por ciento (100%)** del promedio mensual de salarios y demás factores salariales devengados por mi poderdante en los **dos últimos años de servicios, a partir del 01 de Noviembre del año 2004**, al igual que los valores reconocidos y pagados al actor, en cumplimiento de las sentencias C-314 y C-349 de 2004, y C-862 de 2006 de la Corte Constitucional, dineros que deberán ser cancelados con su respectiva retroactividad.
- 2.3 Que se ordene el ajuste de las sumas de dinero a las que asciendan las condenas, tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto por el artículo 187 inciso final del C.P.A.C.A.

3. NORMAS VIOLADAS

Con la expedición del acto administrativo acusado, la administración infringió las siguientes disposiciones de derecho positivo:

- **DE LA CONSTITUCION:** Artículos 2, 29 y 53
- **DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO:** Artículo 260 y siguientes.
- **DE LA CONVENCION COLECTIVA SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL Y EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES:** Artículo 98.

Al igual que los lineamientos jurisprudenciales, contenidos en los pronunciamientos:

- **DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:** Sentencia C-314 del 01 de abril de 2004 y Sentencia C-349 del 20 de abril de 2004.

4. CONCEPTO DE LA VIOLACION:

La infracción de una sola de tales disposiciones acarrea la nulidad de los actos administrativos acusados.

VIOLACION DE NORMA SUPERIOR:

De conformidad con el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, se creó la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO como una categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de la Protección Social, cuyo objeto es la prestación de los servicios de salud. Frente a este postulado nos encontramos ante una entidad descentralizada por servicios, con autonomía administrativa y financiera dirigida por una junta directiva, es decir, que esta unidad

Mario Germán Ortiz Montoya

Abogado U. Santiago Dr de Cali

Calle 36 25-34 b/Salesianos Tuluá - Valle Tel. 2328473 Cel. 3163457056 - 3166268956
ortizperezabogados@gmail.com

al pertenecer al sector descentralizado no forma parte de la administración central, sino que está adscrita o vinculada al Ministerio de la Protección Social, cuyo titular ejerce sobre ella es un control de tutela basado en la orientación, constatación y aseguramiento de las actividades y funciones de la demandada y que éstas se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales de acuerdo con los planes y programas adoptados, lo que no significa que el sector descentralizado deje de serlo para convertirse en centralizado o que pierda autonomía administrativa o desaparezca la junta directiva, por el contrario, la competencia constitucional del Presidente de la República (Artículo 189 No. 14 de la C.N.) está limitada única y exclusivamente de la planta de personal de la administración central mas no con la descentralizada, pues es de la naturaleza de las entidades descentralizadas y de su autonomía administrativa, adoptar su planta de personal por parte de su junta directiva y así el Decreto 1750 de 2003 en su artículo 6 determine que la junta directiva de las E.S.E. deben proponerse al gobierno nacional la modificación de la planta de personal para su aprobación, la actuación de la respectiva junta directiva y el gerente general como órganos de dirección y administración de la empresa social el estado no solo contrariaron el postulado constitucional mencionado, sino que también infringieron la Ley 489 de 1998 en su artículo 105 que predica el control administrativo sobre las entidades descentralizadas "No comprenderá la autorización o aprobación de los actos específicos que conforme a la ley compete expedir a los órganos internos de esos organismos y entidades".

La violación a la ley, se configura ante la inaplicación de la convención colectiva vigente, que es ley para las partes, se manifiesta en la lectura de los actos complejos demandados, donde se observa que la entidad demandada da una motivación insuficiente, poco seria y no acorde a la realidad.

También la interpretación errada del marco legal se manifiesta en que la entidad demandada, no ha asumido su responsabilidad, amparando su negligencia en una indebida interpretación y aplicación de la Sentencia C-314 de 2004, que daba una definición sobre el respeto de los derechos adquiridos, dijo que la definición de tales derechos debía ser más amplia e incluir los derechos provenientes de la Convención Colectiva y por eso determinó que, para el caso del Instituto de Seguros Sociales, la Convención Colectiva suscrita entre éste y sus sindicatos se aplicará hasta cuando cese su vigencia.

Igualmente se observa que no hay congruencia o consonancia entre lo pedido y lo resuelto, lo que deja entrever que no se realizó lectura de la petición, sino por el contrario, se respondió a la ligera, no resolviendo de fondo y en serie, vulnerando así éste derecho fundamental.

Lo anteriormente expuesto refleja una actitud caprichosa y violatoria no solo de la ley mencionada, sino también del Artículo 1º de la Constitución Nacional, que establece: "Colombia es un Estado Social de Derecho" el que se definió por la corte Constitucional en Sentencia T-570 de 1992 como "aquel que consagra, protege y hace efectivo el derecho de las personas, sus garantías y sus deberes. La protección de los derechos se integra como elemento definitorio de los derechos del Estado Social de Derecho. El respeto a la dignidad humana, al trabajo y a la solidaridad, de las personas que integran la Nación, le dan en su conjunto un contenido material y no simplemente formal al Estado Social de Derecho, el cual ya no puede seguirse definiendo como el "imperio de las leyes". No se puede olvidar que es el Estado mismo el que debe garantizar los derechos a sus conciudadanos y no usar su posición dominante para vulnerarlos. Los Actos Administrativos demandados desconocieron al pensionado sus

9 138

Mario Germán Ortiz Montoya

Abogado U. Santiago Dr de Cali

Calle 36 25-34 b / Salesianos Tuluá - Valle Tel. 2328473 Cel. 3163457056 - 3166268956
ortizperezabogados@gmail.com

derechos laborales adquiridos, debiéndose en consecuencia restablecerse su derecho, revisándose la pensión de vejez que le fue reconocida, de conformidad con lo establecido en el Artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo pactada entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, teniendo como ingreso base de liquidación el 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio; Ordenándose el respectivo reconocimiento y pago a favor de mi poderdante de la diferencia que resulte, sumas que deberán ser INDEXADAS.

Es de resaltar que la aplicación de la Sentencia C-314 de abril 1º de 2004, fue aplicada en forma recortada por la demandada con el fin de reducir gastos. La entidad cuenta con recursos propios con los que se podrían atender los gastos de personal. Estos recursos se han destinado por el contrario, a cubrir la crisis financiera, que para la demandada se halla representada solo por los gastos de inversión y la deuda pública, obviando los gastos de personal, trasladándose ésta carga a sus servidores públicos.

Por lo expuesto, los actos acusados se hayan afectados de Nulidad por la vulneración de las normas antes citadas.

Las razones expuestas deben llevar a su despacho, a que los actos acusados se hayan afectados de Nulidad, y que realmente hay motivos valederos para hacer aplicación de las normas antes citadas, solicitando acceder a las pretensiones de esta demanda.

5. LAS PERSONAS EN EL PROCESO Y SUS REPRESENTANTES

Parte demandada:

La **UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP** o Entidad demandada, representada para estos efectos por su actual Director o por quien lo reemplace o lo represente legalmente.

Parte demandante:

El Médico, Dr. HUGO MONCAYO CASTRO, quien lo hace debidamente representado por el suscrito apoderado, conjugándose capacidad jurídica, procesal y de postulación.

Interviniente:

El señor Agente del Ministerio Público, con quien ha de surtirse la tramitación del proceso.

6. PRUEBAS

Téngase como pruebas las que a continuación me permito relacionar:

1. PRUEBAS DOCUMENTALES

a) Poder conferido por el Demandante, señor **HUGO MONCAYO CASTRO**

10 139

Mario Germán Ortiz Montoya

Abogado U. Santiago Dr de Cali

Calle 36 25-34 b / Salesianos Tuluá - Valle Tel. 2328473 Cel. 3163457056 - 3166268956
ortizperezabogados@gmail.com

-
- b) **Copia de la Convención Colectiva suscrita entre la Organización Sindical, y el Instituto de Seguros Sociales.**
 - c) Copia de los respectivos actos demandados, esto es la **Resolución No.16977** del 29 de abril de 2015; La **Resolución No.RDP029095** del 15 de julio de 2015; La **Resolución No.RDP042304** del 15 de octubre de 2015 y la **Resolución No.ADP013195** del 21 de octubre de 2015.
 - d) **Resolución No.1062** del 28 de Octubre de 2004 que reconoció la Pensión de Jubilación al demandante.
 - e) Copia informativa de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali-Sala Laboral.
 - f) Acta o Constancia original de No conciliación extrajudicial expedida por la Procuraduría 58º judicial para asuntos administrativos
 - g) Argumentación de la UGPP dentro de la diligencia de Conciliación fallida.
 - h) Copia autenticada de los Factores salariales exigidos por la UGPP dentro del trámite administrativo del periodo: 26 de JUNIO/2003 hasta el 30 de OCTUBRE/2004, expedido por el Ministerio de Salud y protección social.
 - i) Copia informativa del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Primera de descongestión, fechada el 03 de septiembre de 2015, Demandante: Fabiola Satizabal González.

7. ANEXOS

- 1. Poder otorgado a mi favor
- 2. Copias de la demanda y sus respectivos anexos para el archivo de este despacho y traslados a la entidad demandada y al señor agente del ministerio público.

8. COMPETENCIA Y CUANTIA

Es competencia de su despacho en primera instancia por la naturaleza de la acción, el domicilio de la parte demandante, el último lugar donde prestó sus servicios y por la cuantía que se deriva de aquélla, la cual no excede de 50 SMLMV (50) salarios mínimos legales mensuales.

Estimación razonada:

"Teniendo en cuenta que la demanda hace referencia a reajustes de la pensión de jubilación reconocida por la ESE ANTONIO NARIÑO y el ISS, hoy UGPP, de conformidad con lo previsto en el artículo 157, inciso final, las pretensiones de la demanda, sin perjuicio de la interrupción de la prescripción, en los tres últimos años, asciende a la suma de \$31 '536.355,00, que corresponde a lo siguiente:

VALOR DEL REAJUSTE MENSUAL DE LA PENSIÓN:

11 140

Mario Germán Ortiz Montoya

Abogado U. Santiago Dr de Cali

Calle 36 25-34 b/Salesianos Tuluá - Valle Tel. 2328473 Cel. 3163457056 - 3166268956
ortizperezabogados@gmail.com

AÑO: **2013:** Contabilizado desde el 24 de junio hasta el 31 de diciembre, incluida la mesada del mes de diciembre, alcanza la suma de **\$4'937.354,00**

AÑO **2014:** Del 01 de enero al 31 de diciembre, incluida la mesada del mes de diciembre, alcanza la suma de: **\$9'856.856,00**

AÑO **2015:** Del 01 de enero al 31 de diciembre, incluida la mesada del mes de diciembre, alcanza la suma de: **\$10'415.802,00**

AÑO **2016:** Del 01 de enero al 24 de junio de 2016 fecha de presentación de la demanda, alcanza la suma de: **\$6'326.343,00**

Por consiguiente la cuantía la estimo en la suma de **\$31'536.355,00** monto que se determina por el trienio que se establece en el inciso final del Artículo 157 del C.P.A.C.A.


9. FUNDAMENTOS LEGALES

Esta demanda se fundamenta en los artículos 138, 155, 156, 157, 162, 163 a 167 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo; y, en las disposiciones citadas en el acápite del quebrantamiento normativo.

10. NOTIFICACIONES

1. El CONVOCANTE en la Carrera 13 # 1-39 de Buga (V), Tel. 2283107, Cel. 3162905361, correo electrónico: gilma_santacruz@hotmail.com
2. La CONVOCADA **UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP**, en la Calle 19 # 68 A - 18 de Bogotá; Tel. 018000423423; correo electrónico: notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co
3. El suscrito apoderado, en la Calle 36 # 25-34 Piso 1º de Tuluá; Tel. 2328473; Cel.3163457056, Correo electrónico: ortizperezabogados@gmail.com

Atentamente,


MARIO GERMAN ORTIZ MONTOYA
CC. No.6.181.746 de Buga
TP.No.14586 del C. S. de la Judicatura

